

# De la transición energética a la transición para la seguridad energética

Josep Nualart Corpas  
06/01/2023  
VientoSur

Hoy en día nos encontramos en un contexto de crisis energética derivada de múltiples factores que han ido aconteciendo en los últimos años. Su convergencia ha hecho que países del Norte global, enriquecidos a lo largo de las últimas décadas por el expolio del Sur global, hayan acabado por darse de frente con problemáticas que nunca se habrían imaginado que les llegarían algún día. Según las instituciones europeas, toda la culpa es de Rusia, ya que, con la invasión de Ucrania y las sanciones económicas como respuesta por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, causó los problemas de suministro, especialmente del gas ruso, hacia los países europeos. Pero más que nada, la situación ha puesto en evidencia la alta dependencia que tiene el viejo continente en relación con los combustibles fósiles rusos. La crisis energética ya había empezado unos meses antes, a mediados de 2021, cuando el precio del gas fósil empezó a incrementarse porque el parón en el comercio internacional que supuso la pandemia había dejado algunos países europeos y asiáticos sin suficientes reservas de gas fósil para hacer frente al invierno. Por lo que los países importadores iniciaron una carrera para hacerse con todo el gas fósil necesario importado por barco, creando un gran desajuste entre la demanda y la oferta. Esto también se tradujo en un simulacro de la narrativa Winter is coming por parte de los gobiernos europeos, ya que China, Corea del Sur y Japón les ganaron la partida, y se anunciaron posibles cortes de suministro durante los últimos meses de 2021.

Tampoco hay que olvidar que antes de la crisis energética la Comisión Europea formuló su estrategia para llevar a cabo la transición energética europea con el European Green Deal (Pacto Verde Europeo). Este fue presentado por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en diciembre de 2019 y se basaba en el New Deal del presidente estadounidense Roosevelt en la década de 1930 para la reconstrucción del país después del crack de 1929, y en el Green New Deal presentado unos meses antes por la congresista

Alexandra Ocasio-Cortez. El objetivo del European Green Deal es que Europa sea el primer continente que utilice energía 100% renovable, basándose en tres supuestos. En primer lugar, que Europa vuelva a ser competitiva en la economía global frente a Estados Unidos y China. El segundo supuesto es que, aunque estemos en una crisis climática, el crecimiento económico es posible, ya que habrá muchas oportunidades comerciales durante el periodo de transición. Es lo que conocemos como crecimiento verde. Por último, el crecimiento verde será posible gracias a las nuevas tecnologías y la digitalización de la economía, alineándose con los objetivos net-zero (cero emisiones de gases de efecto invernadero en 2050).

El desarrollo de esta estrategia supondría replicar el mismo modelo energético. Es decir, no cuestionar la cantidad de energía consumida, sus usos ni los impactos que supondría la implementación de las energías renovables a gran escala. Por lo que podemos afirmar que reproduciría un modelo energético extractivista y neocolonial porque la extracción de las materias primas críticas necesarias para las placas fotovoltaicas y aerogeneradores (litio, níquel, cobalto, etc.) se encuentran en los países del Sur global, como Chile, Argentina, Bolivia, República Democrática del Congo e Indonesia. Así, podemos afirmar que este modelo energético no tiene en cuenta los límites biofísicos del planeta, ya que otros países del Norte global –como EE UU o China– también han desarrollado sus Green Deals y, por lo tanto, se ha demostrado que las reservas actuales de materias primas críticas no podrán satisfacer las demandas (Pérez, 2021). Un hecho que lo demuestra es cómo se ha intensificado la carrera de los países del Norte global para hacerse con las materias primas minerales para llevar a cabo la transición verde, proponiendo estrategias alrededor de los minerales categorizados como críticos. En el caso del Estado español, el MITECO ha desarrollado la “Hoja de Ruta para la gestión de las Materias Primas Minerales” (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,

2022).

Una transición de la economía, especialmente de los sectores más contaminantes como es el sector energético, requiere una gran cantidad de dinero. Una de las principales fuentes de financiación del European Green Deal son los fondos Next Generation EU, creados por la Comisión Europea para hacer frente a los impactos de la crisis económica acentuada por la covid-19 y para financiar su transición verde y digital. El presupuesto total es de 750.000 millones de euros, que se entregan a los Estados miembros de la Unión Europea a través de diferentes mecanismos, siendo el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) el que cuenta con la mayor dotación: 692.000 millones de euros. Para recibir dinero de este mecanismo, los Estados miembros deben presentar un plan nacional de recuperación y resiliencia, y la Comisión Europea les debe dar el visto bueno. El dinero facilitado a los Estados miembros se entrega a través de subvenciones o préstamos. En el caso del Estado español, que es el Estado miembro que puede recibir la mayor cantidad de estos fondos: 140.000 millones de euros, a un 50-50 entre subvenciones y préstamos aproximadamente. Por el momento, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene aprobados unos 69.000 millones de euros en subvenciones y está actualmente redactando su propuesta para recibir unos 80.000 millones de euros en préstamos provenientes del MRR.

Los fondos Next Generation EU están dirigidos a la modernización industrial en clave verde y digital, lo que significa que el 37% de los fondos se destine a proyectos verdes, que deben cumplir con el principio de “no causar daño significativo”, y el 20% a la digitalización de la economía. Aunque la intención pueda ser buena, el reparto de los fondos demuestra que, fundamentalmente, serán las grandes empresas las principales beneficiarias. Por ejemplo, las grandes empresas del oligopolio energético español como Repsol, que ha creado el mayor consorcio de hidrógeno SHYNE (Spanish Hydrogen Network) para recibir los fondos europeos. La lluvia de fondos europeos supone una oportunidad única para estas grandes empresas para financiar su transición empresarial con dinero público.

Pero la invasión de Ucrania ha cambiado las reglas del juego. La transición energética a las renovables y convertir Europa en el primer continente verde ya no son la prioridad número uno. Ahora lo más importan-

te y urgente es garantizar el suministro energético del próximo invierno, sin importar si es a través de los combustibles fósiles, la nuclear o las renovables. Para llevarlo a cabo, el pasado mes de mayo la Comisión Europea presentó el REPowerEU, la estrategia energética para que la Unión Europea deje de depender de los combustibles fósiles rusos. Aunque este tipo de estrategias no son nuevas por parte del continente europeo, ya que en 2014 se aprobó la “Estrategia Europea para la Seguridad Energética”, que justamente tenía el mismo objetivo que el REPowerEU: diversificar los proveedores de energía. En ese momento la situación no era tan crítica como la actual, aunque fue justo después de la anexión de Crimea y de que en 2006 y 2009 el Kremlin cerrase los gasoductos que pasan por Ucrania, lo que dejó a millones de ciudadanos del centro y el este de Europa sin gas fósil en pleno invierno. De manera paradigmática, la dependencia de la Unión Europea en la importación de gas fósil ruso se ha incrementado en los últimos siete años, pasando del 40% al 43%. Uno de los motivos principales ha sido la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream I, entre Rusia y Alemania, el de mayor capacidad de importación hacia la Unión Europea, y la construcción de su gemelo Nord Stream II, aunque este último no se ha llegado a poner en funcionamiento. A destacar que ambos gasoductos sufrieron sabotajes a finales de septiembre de 2022, y al día de hoy aún está pendiente resolver quiénes fueron los responsables.

También merece una mención especial el papel de Estados Unidos en la nueva configuración de actores energéticos de la Unión Europea. En marzo de 2022, poco después del inicio de la invasión de Ucrania, ambos firmaron la Task Force for Energy Security, en la que Estados Unidos se comprometía a suministrar 15 bcm (mil millones de metros cúbicos) de gas fósil por barco durante el año 2022 y 50 bcm anualmente hasta 2030. En el caso del 2022, a principios de noviembre ya se había superado la cantidad acordada, llegando casi a triplicarla (Comisión Europea, 2022). Este acuerdo cumple con dos de las medidas principales para la diversificación de los proveedores de energía de la Unión Europea, como son la compra de gas fósil conjunta entre los diferentes Estados miembros y establecer relaciones a largo plazo con los proveedores. Que Estados Unidos pase a convertirse en uno de los mayores exportadores de gas fósil hacia la Unión Europea es de gran relevancia a nivel geoestratégico, ya que sustituye a uno de sus principales rivales –Rusia– a nivel mundial.

Pero también han cambiado las reglas para la financiación. De los 750.000 millones de euros de los fondos Next Generation EU, 225.000 millones de euros se podrán destinar a proyectos que permitan satisfacer los objetivos del REPowerEU, abriendo la puerta a los combustibles fósiles. Lo preocupante es que estos proyectos no tendrán que cumplir con el principio de “no causar daño significativo” al medio ambiente, la única medida que permitía darle un tono más verde a los proyectos aprobados, aunque también insuficiente. Para poder llevarlo a cabo, los Estados miembros tendrán que redactar un nuevo capítulo REPowerEU de los planes de recuperación y resiliencia para que sea ratificado por la Comisión Europea. Se pensaba que el Estado español lo mandaría en el mes de septiembre, pero a mediados de noviembre aún no consta que se haya iniciado ese proceso. En este sentido, podemos afirmar que la Unión Europea ha pasado de una transición energética a una transición para la seguridad energética, permitiendo que los fondos Next Generation EU se pongan al servicio de las prioridades de la estrategia REPowerEU.

Además, esto ha supuesto el resurgimiento y la propuesta de nuevos proyectos gasistas en toda la Unión Europea (Gerebizza; Taglieri y Nualart, 2022). En el caso del Estado español, hemos visto cómo el MidCat, un gasoducto que debía conectar las localidades de Martorell y Barbairan y convertirse en la tercera interconexión con Francia, ha ganado un gran protagonismo en los últimos meses (Nualart, 2022). Más aún cuando el canciller alemán Olaf Scholz anunció a mediados de agosto que también era un proyecto estratégico para Alemania para dejar de depender del gas fósil ruso. Esto llevó al gobierno español a presionar al gobierno francés, que se había opuesto al proyecto desde el principio. Aunque a finales de octubre cambiaron las tornas, ya que el primer ministro portugués y los presidentes español y francés anunciaron que se llevaría a cabo el BarMar, un gasoducto submarino que conectaría los puertos de Barcelona y Marsella y que sustituiría al MidCat. La cuestión por la que el gobierno francés ha cambiado su postura respecto a una tercera interconexión con el Estado español es porque esta se ha planteado a largo plazo, ya que estaría operativa en unos cinco años. El objetivo del BarMar será transportar hidrógeno, un vector energético que presenta dudas a nivel técnico y que aún no se ha desarrollado a gran escala.

Además, las sanciones a Rusia impuestas por la

Unión Europea en represalia por la invasión de Ucrania han tenido un efecto boomerang con el que no contaban las instituciones europeas. Buscar una alternativa a más del 40% de las importaciones de gas fósil en pocos meses es muy ambicioso si en menos de una década no se había hecho. La posibilidad de desabastecimiento de suministro durante el invierno por parte de los países con una alta dependencia de Rusia (centro y este de Europa) y con mayor consumo de gas fósil (Alemania e Italia) ha hecho que se vean las orejas al lobo y la narrativa Winter is coming ha cogido fuerza. La desesperación de la Unión Europea a finales de verano para poder hacer frente al invierno ha reventado el mercado spot [al contado] del gas fósil transportado por barco. En pocos meses el precio de este combustible fósil se ha multiplicado por diez y ha hecho que por primera vez el precio en el mercado europeo sea mayor que en el asiático.

Pero a veces las prisas no son buenas compañeras. El hecho de que las temperaturas durante los meses de septiembre y octubre fuesen más altas de lo habitual hizo que se consumiera menos gas fósil de lo previsto y a principios de octubre los almacenes de gas fósil en Europa ya estaban por encima del objetivo fijado para el 1 de noviembre (90%) (Kemp, 2022). Una de las consecuencias es que en las últimas semanas de octubre había decenas de barcos metaneros dando vueltas en el mar Mediterráneo esperando que se les permita entrar en un puerto para descargar y hacerlo por un precio parecido al que se había previsto su venta (Reuters, 2022). Esto nos indica la clara finalidad especulativa de los mercados spot y cómo se prioriza los beneficios económicos frente a poder cubrir las necesidades. La egoísta apuesta de la Unión Europea para abastecerse cuanto antes mejor del gas fósil necesario para hacer frente al invierno ha dejado en la estacada a países empobrecidos como Pakistán o Bangladesh (Portell, 2022). El encarecimiento del precio del gas fósil ha supuesto que no pudieran abastecerse de este combustible fósil como en los años anteriores, cuando se les incentivó a la construcción de infraestructuras de importación para su transición del carbón al gas fósil.

Dejando a un lado las estrategias y medidas energéticas a nivel institucional, hemos visto cómo la crisis energética ha tocado a la población con un incremento del precio de la energía sin precedentes en Europa y también en EE UU. Como se ha comentado antes, la paralización del comercio internacional

por la pandemia es una de las causas de la crisis energética, pero también nos estamos topando con el agotamiento de los combustibles fósiles y, por lo tanto, la energía barata. Esto ha puesto de manifiesto que el modelo energético actual ya no funciona, y hasta lo ha admitido la misma presidenta de la Comisión Europea (El Salto, 2022), quien ha anunciado que es necesario llevar a cabo la reforma del pool energético, el mecanismo por el que se establece el precio de la electricidad atendiendo las diferentes tecnologías utilizadas para generarla, ya que no estamos en la misma situación que hace dos décadas, cuando se creó. Esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre la situación en la que nos encontramos, lo que era impensable hace unos años.

En el caso de los Estados miembros de la UE, por ahora solo se están poniendo parches. Alemania ha aprobado una medida para que el gobierno pague el 100% de las facturas del gas fósil de todos los consumidores del mes de diciembre. Esta se podría ver con buenos ojos, pero dicho pago se hará sin distinguir entre rentas, lo que acabará beneficiando a las personas con mayor poder adquisitivo y tampoco supondrá una medida para reducir el consumo. Además, supondrá un gasto extra de 9.000 millones de euros. Si nos fijamos en el Estado español, vemos que el gobierno ha aprobado más de veinte medidas para rebajar los precios de la energía y los combustibles, algunas de las cuales terminarán a finales del invierno. Es necesario remarcar que es muy posible que dichas medidas se prorroguen, como ya ha pasado con las medidas aplicadas durante la pandemia, ya que la lógica por parte de los gobiernos es cortoplacista, con visión electoralista. Mientras los beneficios de las grandes empresas petroleras y energéticas se han disparado en el tercer trimestre de 2022, el gobierno del Estado español ha propuesto en julio de 2022 un impuesto a las energéticas para gravar un 33% sobre los beneficios de dichas empresas obtenidos en 2022 (Europa Press, 2022). La medida, muy necesaria en términos de redistribución de la riqueza, está actualmente en debate en el Congreso. En el caso de las cinco grandes petroleras europeas, los beneficios en el primer semestre del año se han disparado hasta casi 75.000 millones de euros (Meggiolaro, 2022), mientras que Endesa ha obtenido 1.651 millones de euros e Iberdrola 3.104 millones de euros hasta el mes de septiembre (Vélez, 2022).

Por ahora, hemos visto cómo las medidas aplicadas por las instituciones y los gobiernos nacionales y eu-

ropeos se basan en poner parches para poder afrontar los impactos a corto plazo, pero será necesario un cambio de modelo energético de raíz para enderezar la situación. Este nuevo modelo energético debe ser renovable, descentralizado, democrático y bajo el control de la población. Además, debe incluirse en los paradigmas del ecofeminismo y el decrecimiento para cambiar también de raíz el sistema socioeconómico, permitiendo a la población decidir cómo, para qué y para quién se quiere generar la energía. Las implementaciones de estos cambios de paradigma nos permitirían transicionar hacia un modelo ecosocial más justo, no solamente entre las personas que vivimos en el Norte global, sino también con las del Sur global.

Por todo ello, podemos concluir que las medidas aplicadas últimamente por las instituciones nacionales y europeas están convirtiendo la transición energética en una transición para la seguridad energética. Cabe remarcar que el Pacto Verde Europeo y los fondos Next Generation de la UE no nos iban a permitir llevar a cabo una transición ecosocial justa, pero dejar de depender de los combustibles fósiles era un primer paso para cumplir con los objetivos climáticos. Si antes ya era dudoso que dicha estrategia se basaría en una transición real, ahora, con los recientes cambios de las políticas energéticas, ni se pretende ser verde ni apostar por un cambio estructural. También debemos cuestionar a lo que se refieren con seguridad energética, ya que el juego geoestratégico está haciendo que la Unión Europea no disminuya su dependencia energética, sino simplemente cambie de manos. Además, se sigue apostando por infraestructuras de combustibles fósiles, contradiciendo y dejando en un segundo plano los planes y estrategias elaborados hace pocos años para convertirse en el primer continente con energía 100% renovable y liderar las políticas de reducción de emisiones y lucha contra el cambio climático. Desviar la financiación dedicada a la transición energética para hacer frente a la inmediatez también denota su lógica cortoplacista y poca capacidad y voluntad de proyectar horizontes que permitan erradicar el problema desde la raíz, desmantelando las estructuras de poder del actual modelo energético y poniéndolo al servicio de la población.

Josep Nualart Corpas es investigador en energía y clima en el Observatori del Deute en la Globalització (ODG)